

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Auto - Ejecutivo	
DEMANDANTE	MAURICIO MONTOYA ALVAREZ, LUIS CAMILO OSORIO ISAZA y ÓSCAR JIMÉNEZ LEAL
DEMANDADO	ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUEZ y LUZ MARYORY VALENCIA QUINTERO
RADICADO	05001-31-05-023-2022-00249-01
MAGISTRADA PONENTE	Dra. MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
DECISIÓN	CONFIRMA.

Medellín, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, adopta decisión de segunda instancia en el Proceso Ejecutivo promovido por **MAURICIO MONTOYA ALVAREZ**, abogado titulado, quien actúa en calidad de demandante en causa propia y en representación de los señores **LUIS CAMILO OSORIO ISAZA** y el señor **OSCAR JIMÉNEZ LEAL**, así como, en representación de la sociedad **AS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS S.A.S**, contra **ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUEZ y LUZ MARYORY VALENCIA QUINTERO**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 015**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES.

Se resuelve el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra del auto proferido por el Juez Veintitrés Laboral del Circuito de

Medellín, el día 10 de agosto de 2022, mediante el cual negó el mandamiento de pago deprecado.

II.- SUPUESTOS FÁCTICOS.

Los demandantes presentaron **DEMANDA EJECUTIVA LABORAL** contra ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUEZ y LUZ MARYORY VALENCIA QUINTERO, aduciendo en los hechos de la demanda, que las partes se vincularon mediante contrato de prestación de servicios, a través del cual los ejecutantes se obligaron a prestar sus servicios profesionales como abogados, y en particular a brindar asesoría, consultoría externa, servicios de investigación, estudio, promoción y desarrollo de actividades profesionales, en el proceso penal que adelantaba la Fiscalía General de la Nación, en contra de los demandados.

Se expuso también que los contratantes requirieron asesoramiento jurídico específico- calificado y decidieron contratar los abogados hoy DEMANDANTES como asesoría externa y en desarrollo de actividades jurídicas y complementarias a la principal, para el estudio, promoción y desarrollo de actividades profesionales, donde el abogado principal, continuara en ejercicio de sus funciones propias al cargo encomendado y los hoy demandantes como apoyo externo.

Se manifestó que la contratación en mención se dio a inicios del mes de enero de 2019, relación contractual que terminó una vez los contratantes obtuvieron la sentencia “en firme”, la cual no goza de recursos porque terminó con preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que data del 19 de julio de 2019, decisión que definió la situación jurídica dentro del proceso penal que adelantaba la Fiscalía, con radicado nro. 63001600877520180000500.

Se adujo que el contrato de prestación de servicios profesionales, en la cláusula segunda, fijó los honorarios como contraprestación del servicio en la suma de \$400.000.000.

Particularmente en el hecho quinto de la demanda se expresa que el objeto contractual quedó cabalmente cumplido por LOS CONTRATISTAS, lo cual se

corroborar con la presentación de las pruebas que dan fe y certeza que se brindó Asesoría Jurídica y de consultoría, actividades profesionales, como asesoría externa para los contratantes y al abogado principal que ejercía la representación de los contratantes.

Se añadió que mediante audiencia celebrada el 2 de febrero de 2021, adelantada ante el Juzgado 17 Civil Municipal de Medellín, radicado nro. 050014003017202000229, los demandados hicieron reconocimiento de contenido y firma, respecto del contrato de prestación de servicios anexo al expediente.

Se invocó a título de pretensiones, el pago de:

“PRIMERO: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS, moneda legal colombiana \$400.000.000 como capital, por la condena en concreto, generada por los honorarios de abogados dejados de cancelar.

SEGUNDA: Los intereses bancarios corrientes, más su mitad, vigente durante la mora, conforme de la superintendencia financiera, o a la tasa de interés que el juzgado estime acorde a derecho conforme a la ley. Desde que se hizo efectivo el pago hasta el cumplimiento de la obligación.

TERCERA: Por las costas de este trámite ejecutivo en caso oposición”.

III.- AUTO IMPUGNADO

En auto del 10 de agosto de 2022 (PDF 06), el A Quo decidió negar el mandamiento de pago deprecado, por considerar que el documento presentado como base de la ejecución, es un título ejecutivo complejo, y en tal sentido la obligación no puede ser reclamada con la sola presentación del contrato de servicios profesionales, sino que se hace indispensable el acompañamiento de los documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones que allí se indican, esto es, la verificación de la etapa procesal en la que culminó la gestión judicial encomendada; sustentando su decisión en la Sentencia T- 747 del 2013, a través de la cual la Corte Constitucional indicó que la obligación debe ser clara, expresa, nítida y manifiesta, lo cual exige realizar una valoración de los documentos allegados con la demanda que permitan determinar si constituyen prueba idónea de la existencia o no de una obligación clara, expresa y exigible a

favor del ejecutante, conforme lo establece el artículo 422 del CGP, y concluyó que para el despacho, el título valor complejo que sirve de sustento a la ejecución promovida no reúne todos los requisitos.

IV.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Inconforme con la decisión de primer grado, la parte ejecutante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación, manifestando que difiere de la decisión adoptada por el juez de la primera instancia, en el entendido que el contrato de prestación de servicios aportado como título ejecutivo, definió claramente el objeto contractual, el cual está direccionado a prestar asesoría jurídica y **consultoría externa** al abogado principal contratado por los demandados en el proceso penal, quedando imposible exigirle a la parte actora, demostrar actuación dentro del proceso judicial, en el entendido de que el mismo contrato fijó como objeto contractual la **asesoría externa**.

Agregó también la parte recurrente que, no cabe duda que el objeto de la contratación está enmarcado en la senda única de prestar asesoría jurídica, de consultoría, de investigación, estudio, promoción y desarrollo de actividades profesionales en el caso que se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación en contra del ANAUR OSWALDO OYOLA MARQUEZ, otros terceros y su grupo familiar, donde el abogado principal, continuara en ejercicio de sus funciones propias al cargo encomendado; y la función de los demandantes, estaba dirigida a brindar asesoría jurídica y acompañamiento a las partes y al apoderado principal, situación que se demuestra con todos los soportes presentados en el escrito de demanda, donde se revisó todos los documentos compartidos por el apoderado principal, se dio alcance a los conceptos emitidos por los hoy demandantes, las diferentes actuaciones en nombre de los demandados frente a las instituciones del estado que regulan el derecho electoral, sin pasar por alto que el mismo contrato fue sometido a proceso de reconocimiento de firma y huella al juzgado competente, esto es, el Juzgado 17 Civil Municipal de Medellín, radicado Nro. 050014003017202000229 y los demandados no rechazaron en ningún momento el documento ni sus firmas.

Finalizó aduciendo que basta con analizar el contrato de prestación de servicios profesionales, para encontrar que del mismo emanan los requisitos de exigibilidad, claridad y obligación expresa, y enfatizó que, en el acápite de hechos de la demanda ejecutiva, se establecido las partes vinculadas en el contrato, el precio, su forma de pago y los extremos temporales.

V. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En providencia del 07 de diciembre de 2022 (PDF 09), el juez de la primera instancia, mantuvo incólume la decisión de denegar mandamiento y pago y concedió el recurso de apelación.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En la oportunidad de ley, el apoderado judicial de la parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión en sede de segunda instancia, a través del cual pidió que se revoque la decisión de primera instancia.

Dijo el recurrente que en el caso en concreto está probado que entre las partes se suscribió un contrato de prestación de servicios, que tuvo por objeto la asesoría y consultoría, y que el texto fue sometido a reconocimiento de contenido y firma por los deudores y que a la fecha no han sido cancelados los honorarios, por lo que a términos de lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Procedimiento del Trabajo, a su juicio, procede el mandamiento de pago.

Argumentó que las obligaciones de medio son aquellas a las cuales está obligado el profesional del derecho a cumplir en el ejercicio de su profesión, sin precisar de la realización de determinada finalidad; y a contrarium sensum, son de resultado las obligaciones en las cuales ejecutor se obliga a realizar específica finalidad y en el caso que nos ocupa, las obligaciones que corresponden al contrato de prestación de servicios, son de medio, y existe impedimento de los abogados, de comprometerse con resultado distintos de poner toda su capacidad profesional a los fines para obtener los mejores resultados en aplicación de la ley.

Comentó el apelante que el titulo base de ejecución presentado, contiene los elementos esenciales para su ejecución, a saber: (i) define con precisión el

cumplimiento pleno de la gestión; está descrita expresamente dentro del contrato el objeto del mismo, el cual se circunscribe únicamente a la asesoría y consultoría externa, siendo el abogado principal, responsable único para actuar ante la justicia (ii) se allegó al proceso la totalidad de los conceptos, análisis y diligencias correspondientes a la asesoría y consultoría, (iii) no es necesario determinar el monto, porque fue fijado por las partes, en la cláusula segunda del contrato, (iv), prueba del contenido, se tramitó en proceso de reconocimiento de contenido y firmas fijado en el código general del proceso.

Adujo que de la lectura del contrato de prestación de servicios de abogado, se infiere la presencia de un título ejecutivo complejo, dado que la obligación no puede ser reclamada con la sola presentación del contrato de servicios profesionales, y en este caso, con el escrito de demanda se adjuntó: a) carta del señor ANUAR OYOLA MARQUEZ, donde termina el contrato suscrito, manifiesta el no pago de los honorarios pactados, aunque reconoce los extremos del término del contrato y la existencia del mismo; b) copias donde constan los trabajos de asesorías y consultorías pactada, en materias específicas delitos electorales y en concordancia con la nueva legislación de carácter penal; c) constancias de gestión y entregables con ayudas de memoria periódicas de los trabajos cumplidos por los tres profesionales del derecho contratados; d) constancia de los abogados haber concurrido a los Juzgado Civiles de Medellín, en proceso radicado bajo el número 05001400301720200022900, con el reconocimiento y firma del contrato de prestación de servicios e) reporte del proceso penal número 63001600877520180000500, que evidencia la ejecutoria de la sentencia con la que se puso fin al proceso penal de los ejecutados.

Puntualizó finalmente que, en la cláusula séptima, se estableció el mérito ejecutivo del contrato; y, en consecuencia, no es posible desconocer unilateralmente la condición de mérito ejecutivo pactada en el clausulado.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para resolver, lo primero que debe decirse es que la Sala es competente para resolver del recurso de apelación formulado por la parte ejecutante, ello al

tenor de lo dispuesto por el numeral 8° del artículo 65 del CP.T y S.S., modificado por el 29 de la Ley 712 de 2001.

Antes de librar el mandamiento de pago, el administrador de justicia debe realizar un análisis de la factibilidad de la ejecución, tal como lo señalan los artículos 100 del CPT y de la Seguridad Social y 422 del Código General del Proceso, este último por aplicación analógica permitida por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

“ARTICULO 100 CPT y SS. PROCEDENCIA DE LA EJECUCIÓN.
*Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, **que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante** o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.*

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso.”

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Para resolver, lo primero que debe advertirse es que el proceso ejecutivo busca satisfacer una obligación, respecto de la cual, **no existe incertidumbre alguna, dada la certeza del derecho incorporado en un título ejecutivo** que deberá colmar con las características de contener una obligación clara, expresa y exigible: “que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente

*es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta*¹.

Conforme a lo anterior, el debate se contraerá a analizar si en efecto era viable librar orden de apremio, en los términos y cuantía invocada por el apoderado de la parte demandante, o como lo concluyó el juez de la primera instancia, el título valor complejo que sirve de sustento a la ejecución promovida, no reúne todos los requisitos de ley.

Pues bien, en el caso de marras, no cabe dudas que la parte demandante pretende la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, que obra en el PDF 05 entre folios 31 a 33, a través del cual LUZ MARYORY VALENCIA QUINTERO y ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUEZ, contratan los servicios de MAURICIO MONTOYA ALVAREZ, la sociedad AS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS S.A.S, y al señor OSCAR JIMÉNEZ LEAL. (sin indicarse fecha), documento que tiene nota de desglose ante el Juzgado Diecisiete Civiles Municipales de Medellín.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO

Entre Luz Maryory Valencia Quintero, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía 41937863, y Anuar Oswaldo Oyola Marquez quien en el texto del presente **CONTRATO** se denominará **EL CONTRATANTE** y los profesionales del derecho **MAURICIO MONTOYA ALVAREZ** identificado con la cédula de ciudadanía 1.020.413.587 abogado en ejercicio con T.P. 188.388 del C.S. de la J y **LA SOCIEDAD ECONÓMICAS Y JURÍDICAS SAS**, representadas por el doctor **LUIS CAMILO OSORIO** en calidad de asesor jurídico, persona mayor de edad y vecino de la ciudad Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía 17.126.289 abogado en ejercicio con T.P. 3.804 del C.S. de la J y **OSCAR JIMÉNEZ LEAL**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 17.042.891, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar un **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES** que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil aplicables a la materia.

En la cláusula segunda del referido contrato, se pactó como **objetivo** del mismo:

¹ Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

PRIMERA.- EL CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará Asesoría Jurídica y de consultoría diversas actividades relacionadas, con los servicios de investigación, estudio, promoción y desarrollo de actividades profesionales en el caso de la fiscalía general de la nación contra ANAUR OSWALDO OYOLA MARQUEZ, otros terceros y su grupo familiar, donde el abogado principal, continuara en ejercicio de sus funciones propias al cargo encomendado, y fue debidamente apoderado. Obrando la parte contratada mediante el presente acuerdo como asesoría externa y en desarrollo de actividades jurídicas y complementarias a la principal para asegurar la debida defensa de los procesados mencionados a fin de coadyuvar en el debido proceso por las garantías y derechos fundamentales a los que tienen derecho, de acuerdo con la información recibida del cliente en las actuaciones de haber obrado con apego a la ley y a las normas del proceso electoral, objeto de las acciones que adelanta la fiscalía, en particular la obtención de libertad de los procesados y las acciones convergentes con la defensa principal, para obtener el cese de todo procedimiento por inexistencia de hechos punibles, conductas que puedan ser calificadas de delitos electorales.

Y en su cláusula tercera se estipuló como **precio** del contrato.

SEGUNDA.- HONORARIOS: EL CONTRATANTE, pagará por concepto de honorarios, la suma de cuatrocientos millones de pesos (\$400.000.000.00), distribuidos de la siguiente manera:

La suma de doscientos millones de pesos (\$200.000.000.00), una vez se obtenga en el proceso, ante la fiscalía general de la nación y el juez competente la revocatoria de la medida de aseguramiento y la obtención de la libertad.

La suma de doscientos millones de pesos (\$200.000.000.00) una vez terminado el proceso que cursa en contra de los hoy contratantes, por conducto de preclusión, inhibitorio o cualquier otra causa que conduzca al archivo del proceso.

249 Pag.0052

249 Pag.0053

La cancelación del dinero adeudado se hará en moneda legal corriente y será cancelado en la forma indicada; Se entiende que si **EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA** acuerdan extender el servicio de Asesoría a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la primera cláusula, la remuneración de éste servicio se pactará entre las partes con independencia del monto de honorarios en renglones anteriores convenido.

De acuerdo a lo anteriormente transcrito, y sin olvidar lo dispuesto en el artículo 422 del CGP, que exige que para que un documento pueda prestar mérito ejecutivo debe contener una obligación clara, expresa y exigibles, resulta cristalino para esta sala concluir, que si el demandante pretendía acudir a la vía ejecutiva para ejercer la acción de cumplimiento de un contrato no cumplido por su contraparte, además de allegar el documento donde reposan las obligaciones contraídas por las partes, debía allegar también los documentos que demuestren el cumplimiento de las prestaciones pactadas a su cargo, o lo que es lo mismo, que el titulo ejecutivo dentro del presente asunto, era complejo o compuesto como bien lo determinó el juez de la primera instancia, pues no solo lo constituye el documento que contiene la obligaciones, sino además, todos los documentos que

demuestren que el demandante cumplió o se allanó a cumplir la obligaciones por el contraídas.

En efecto, el contrato que vincula a las partes, es un contrato de prestación de servicios profesionales, lo que quiere significar que se trata de un mandato, sin que ello constituya per se, un título ejecutivo, pues en todo caso, debe existir prueba de que el objeto del mismo se ejecutó, por lo que la sola exhibición del contrato por medio del cual se plasmaron las obligaciones a que se comprometían las partes dentro del presente asunto, no las hace exigibles inminentemente, aunque en el texto del contrato se hubiese estipulado su exigibilidad por la vía del proceso ejecutivo.

En ese sentido, encontramos que la parte demandante aporta algunas piezas procesales con las que se pretende acreditar que prestó sus servicios a los demandados como profesional del derecho, tales como (PDF 05):

- i)** Carta enviada por el señor ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUEZ, al Dr. LUIS CAMILO OSORIO, donde manifiesta la terminación del contrato de prestación de servicios, y el no pago de los honorarios adeudados.
- ii)** Copia de resoluciones Nro. 2796 de 2017 y resolución N° 21 del 15 de enero de 2019 entre otras.
- iii)** Informe sobre el marco normativo y jurisprudencia de las campañas políticas en Colombia y sobre el concierto para delinquir.
- iv)** Escrito de acusación- folio 237- 261- incompleta- luego continua legajo de documentos relativos a entrevistas realizadas por Forensis Global Group y continua a folio 336.
- v)** Escrito de tutela suscrito por tercero al proceso y sentencia de tutela del 5 de febrero de 2019, del Tribunal Superior de Medellín Sala Penal - folio 377-
- vi)** Solicitud de certificación al Fondo Nacional de Financiación Política, para que acrediten en relación con la campaña electoral del señor ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUEZ candidato a la Cámara de Representantes del Partido Liberal Colombiano, sobre los topes de gastos. La petición deviene invocada por LUIS CAMILO OSORIO, representante legal de la empresa AS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS S.A.S- folio 402-
- vii)** Certificación solicitada folio 403-407
- viii)** Informe Dane.
- ix)** Acta de preacuerdo, que vincula a LUZ MARYORY VALENCIA QUINTERO y ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUEZ- folio – 491-(documento sin firmas)
- x)** Reporte del proceso judicial -folio 560, en la que se registra el preacuerdo suscrito por los demandados- folio 566.

Sin duda, en el objeto del contrato sometido a estudio, se establece de manera inequívoca no solo obligaciones relativas a la asesoría y consultoría externa, como lo manifiesta el apoderado recurrente, sino que en particular los CONTRATISTAS, se obligan a obtener la libertad de los procesados. Nótese además que al estipular el precio del contrato se condicionó el primer pago de \$200.000.000, a que el mismo será desembolsado, una vez se obtenga ante el proceso de la Fiscalía General de la Nación y el juez competente, la revocatoria de la medida de aseguramiento y la obtención de la libertad. El segundo pago por su parte, se convino por \$200.000.000, una vez terminado el proceso en contra de los contratantes, por preclusión, inhibitorio o cualquier otra causa que conduzca al archivo del proceso, aspectos estos, que resultan ineludibles para acreditar la gestión jurídica que aduce haber realizado la parte demandante.

Así pues, la propuesta hermenéutica del recurrente respecto de que la exigibilidad de la obligación, consta plenamente acreditaba en el asunto, por cuanto el contrato solo se circunscribió a una asesoría y consultoría externa y que no debió acreditarse actuaciones judiciales al interior del proceso penal, a juicio de la Sala, tal aseveración no resulta admisible, por cuanto son diversas las obligaciones que emanan del objeto del contrato de prestación de servicios, y que no constan comprobadas, pues, si bien se adjuntan informes relativos a marco normativo y jurisprudencial de las campañas políticas en Colombia y sobre el concierto para delinquir y solicitud de certificado ante el Fondo Nacional de Financiación Política, lo cierto es que con estos documentos no se puede concluir que se acató certeramente con la labor encomendada de asesoría, y consultoría externa; y además el preacuerdo suscrito por los demandados, se contrapone con la obligación de *“obtención de libertad de los procesados y las acciones convergentes con la defensa principal, para obtener el cese de todo procedimiento por inexistencia de hechos punibles, conductas que puedan ser calificadas de delitos electorales.”*

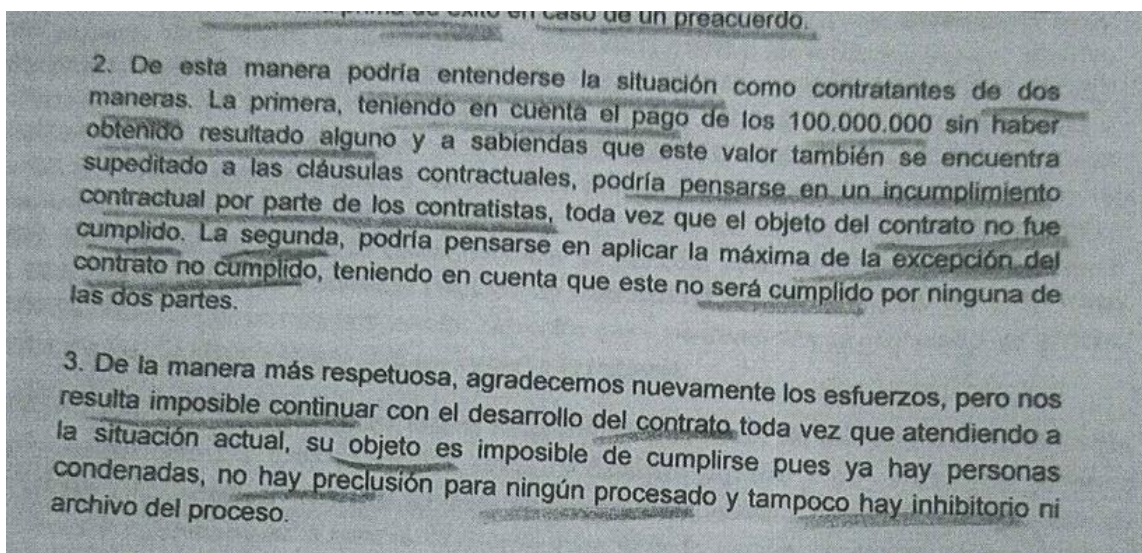
Ahora bien, es indudable que existen obligaciones de medio y de resultado, en las primeras, el deudor se compromete a desplegar toda la diligencia posible para que se produzca un resultado, pero éste no puede ser asegurado ni prometido, mientras que en las de resultado, como su nombre lo dice, el deudor se compromete a obtener un determinado resultado.

De cualquier forma, la distinción entre obligaciones de medio y de resultado es importante para los apoderados judiciales, pues si se concluye que su obligación es de resultado, entonces solo pueden justificar su incumplimiento alegando la presencia de alguna de las causales eximentes de responsabilidad como son la fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima; en cambio, si se sostiene que tiene una obligación de medio, el abogado podrá justificar su incumplimiento demostrando que, no obstante haber sido cuidadoso y diligente, el resultado que se esperaba no se logró por causas ajenas a su comportamiento.

Así las cosas, estima esta sala que no se tiene soporte suficiente para derruir los argumentos de la primera instancia, como quiera que la parte actora no acreditó el cumplimiento total de las obligaciones que emanan del objeto del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes, en las cuales, si bien se establece obligaciones de medio, también se denota otras de resultado, lo cual no se avizora en la actuación.

En el artículo 1546 del C. Civil se expresa: *“En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”*. Y en armonía con la anterior disposición el artículo 1609 ibídem, dispone sobre la mora en los contratos bilaterales: *“En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”*.

En comunicación que data del 22 de agosto de 2019, anexa al expediente en el pdf 05 folio 27 y 28, justamente el demandado ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUEZ, comunica a LUIS CAMILO OSORIO, representante legal de la empresa AS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS S.A.S, que el cumplimiento del pago del contrato de prestación de servicios estaba supeditado a la terminación del proceso que cursaba en contra de los contratantes por conducto de preclusión, inhibitorio o cualquier otra causa que conduzca al archivo del proceso, situaciones que a su juicio no ocurrieron, puesto que el proceso finalizó para algunos, a través de un preacuerdo que implica un fallo condenatorio en contra de ellos, y concluye diciendo:



En mérito de lo expuesto, no se cumple con las exigencias señaladas en las normas citadas para que sea viable librar mandamiento de pago, pues el documento como base de la ejecución, ni separadamente, ni en conjunto con los demás medios de prueba, demuestran una obligación a cargo de los demandados que sea clara, expresa y actualmente exigible; debiendo la parte actora acudir al proceso ordinario para que sean reconocidos los honorarios que deprecia en esta oportunidad.

En consecuencia, acertada resulta la decisión de primera instancia, al negar el mandamiento de pago impetrado, por cuanto el título base de recaudo no reúne las condiciones para iniciar el trámite de ejecución, y en razón de ello, se confirmará.

Sin condena en costas.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,**

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto objeto de apelación, de origen y fecha conocidos.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Se notificó en **ESTADOS** lo resuelto y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 065 del 20 de Abril de 2023.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>.